

woumain

Voz indígena del pueblo wayúu que significa **NUESTRA TIERRA**

Boletín del Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias "Luciano Romero Molina"
N.º 23 • Septiembre del 2023



**Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia:
Veintitrés años defendiendo la vida de la dirigencia social amenazada de muerte en COLOMBIA**

woumain

Voz indígena del pueblo wayúu que
significa **NUESTRA TIERRA**

Boletín del Colectivo de Colombianos/as
Refugiados/as en Asturias
"Luciano Romero Molina"
N.º 23 • Septiembre del 2023

Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia

**23 años defendiendo la vida de
la dirigencia social amenazada
de muerte en Colombia**

AGRADECIMIENTOS:

A las gentes y al gobierno de Asturias, a la Agencia Asturiana de Cooperación al desarrollo, a los ayuntamientos de Gijón y Langreo, a Protect Defenders, a las organizaciones sociales asturianas que acompañan al Programa de Derechos Humanos y las personas perseguidas: Soldepaz Pachakuti, CCOO, UGT, SUATEA, CSI, CEAR, AMNISTÍA INTERNACIONAL, CODOPA, COSAL, ISFA, AMA, CSCA, Ecologistas en Acción, MASPAZ.

A las organizaciones que conforman el Comité de Selección de casos del Programa Asturiano en Colombia: CUT, CPDH, MOVICE, ANDAS, CSPP, ONIC, CAJAR, FENSUAGRO, CNA.

Y a quienes desde los centros educativos, los partidos políticos, las asociaciones de vecinos y culturales, sacan tiempo de su lucha diaria para acompañar con ánimo solidario, internacionalista, la lucha del pueblo colombiano por los derechos humanos y por la paz con justicia social.

COLECTIVO DE COLOMBIANOS/AS REFUGIADOS/AS EN ASTURIAS

"Luciano Romero Molina"

Correo: programasturias@gmail.com
Teléfono 687003737
Calle Manuel Llana, 42 bajo
C.P. 33208. Xixón-Asturies

EN ESTA EDICIÓN:

	página
Editorial: Los retos del cambio.	3
Visita Asturiana: Los ataques no debilitan la esperanza de paz	5
Un cuarto de siglo después: una buena Declaración sobre defensores y una dura realidad.....	8
Un año de aire fresco en Colombia	11
Los pendientes con las lideresas colombianas hacia la paz	14
La autoridad étnica y la democracia local	18
La niñez y la juventud en peligro	20
De narcos, banqueros y otros bandidos	22
El sindicalismo con la soga al cuello	25
Una sociedad pobre en un territorio rico.....	28
Tregua con el ELN hacia la "Paz Total"	31
Entrevista. Miguel Sanmiguel y la alegría solidaria	32
LUCIANO en la memoria de la lucha obrera	34
Anticolonialismo. "Le parfum" apesta	36
Soldepaz, un cuarto de siglo internacionalista	38
Medio siglo del golpe en Chile	39
El olvido que no somos	42
Hacia la Paz Total con las FARC	43

Edita: Colectivo de Colombianos/as Refugiado/as en Asturias "Luciano Romero Molina"

Fotos: Delegación Asturiana, Colectivo de Refugiados "Luciano Romero Molina"

Imprime: Gráficas Ápel

D.L.: AS-03037/2008



Editorial:

Los retos del cambio

Por primera vez en dos siglos de vida republicana las mayorías colombianas lograron elegir un gobierno progresista que tiene grandes retos, como el de meter a los poderes fácticos en cintura para conquistar la paz.

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez hace esfuerzos por atender problemas heredados, producto de la inequidad y de la exclusión violenta que llenaron al país de pobreza.

Se lucha para acabar con la impunidad para los despojadores, los corruptos y los monopolios beneficiarios de la guerra, dedicados a hundir las reformas estructurales en el Congreso y a repartir veneno desde sus medios de comunicación para confundir, dividir, desanimar e intoxicar a millones de personas urgidas de soluciones.

La división de la sociedad colombiana es evidente y hay elecciones territoriales en octubre de este año. Los reformistas quieren la paz con justicia social, pero no tienen la mayoría parlamentaria para darle base legal. Y los dueños del poder necesitan recuperar el gobierno para volver a medrar y para evitar la justicia por ahora en manos de un fiscal de bolsillo.

El movimiento social que ha sobrevivido al exterminio tiene claro que hay que equilibrar las fuerzas con la movilización en las calles. La lucha es por democracia con derechos. Los poderosos quieren la muy rentable continuidad de la barbarie.

Desde Asturias el reto es seguir acompañando las aspiraciones de nuestro pueblo de vivir en paz y con dignidad.



La diplomacia ciudadana que ejercemos en esta parte del mundo está puesta al servicio de los avances sociales y de la paz.

Cuenta con el apoyo solidario de sectores de la sociedad europea que también está en la encrucijada de reforzar derechos y evitar retrocesos graves prolijados por los monopolios que generan pobreza, devastación y guerras con afectaciones globales.





Declaración de la XIX Delegación Asturiana en Colombia

LOS ATAQUES NO DEBILITAN LA ESPERANZA DE PAZ

La XIX Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz recorrió regiones de la Colombia sumergida en el conflicto armado, en las que continúan los ataques contra la población civil y contra la dirigencia social a pesar del ofrecimiento del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez de dialogar, cesar el fuego y acordar los términos que lleven a la “Paz total”.

Nos reunimos con organizaciones sociales, víctimas, autoridades civiles, policiales y militares, además de las reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Restitución de Tierras,

la Cancillería colombiana, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la embajada de España.

Nuestra Delegación encontró en su visita a Tumaco, Pasto, Puerto Guzmán, Villagarzón, Pitalito, Yopal, Arauca y Saravena, una población organizada, que ha logrado resistir señalamientos, amenazas, cárcel injusta, confinamiento, desplazamientos, ataques a las sedes, desapariciones forzadas, campos minados, masacres y asesinatos selectivos.

A pesar del terror desatado en las últimas décadas amplios sectores sociales han dicho de manera masiva ¡basta de guerra, basta de saqueo y basta de terror!

Expresamos nuestra admiración por su valerosa persistencia en defender el derecho

a la vida, al territorio, a la paz y a las libertades fundamentales.

Sois un ejemplo para el mundo y una respuesta para los que se empeñan en seguir acumulando riquezas usando el método del despojo, incendiando con más violencias el hogar común que es la Tierra, imponiendo guerras que pagan los pueblos.

Nuestra Delegación conoce la resistencia de los pueblos de Nariño, Putumayo, Huila, Casanare, Arauca y felicita al gobierno y de manera especial a los habitantes del páramo del Sumapaz por la creación reciente de la Zona de Reserva Campesina tras medio siglo de guerra y treinta años de intentarlo con el propósito de proteger la economía campesina, el agua, la seguridad y la soberanía alimentaria para los millones de habitantes de Bogotá.

La gravedad de los ataques contra la dirigencia social genera miedo y concitan nuestro rechazo, pero no logran debilitar los anhelos de paz de las multitudes que empujan la transformación democrática de la sociedad colombiana.

HALLAZGOS

1. La voluntad clara del gobierno de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ de respetar los derechos humanos y de construir la paz, propósitos que generan esperanzas en Colombia y simpatía en Asturias.

2. La degradación creciente del conflicto armado interno con graves afectaciones a la población civil, jalonado por el narcotráfico, la minería y los agronegocios.

3. La continuidad de los ataques contra la dirigencia social, los firmantes de la paz, las mujeres cabezas de hogar en los asentamientos humanos de Yopal y Nunchía, la persecución contra la dirigencia campesina, los pueblos indígenas y las comunidades negras previa estigmatización, así como la falta de efectividad del sistema de protección y de garantías. Llama la atención que ataques tan graves como el carro bomba contra la sede de las organizaciones sociales en Saravena, los ataques contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sa-

ravena y contra la residencia del líder comunal JHONY DIAZ, ocurran en una ciudad totalmente militarizada.

4. La impunidad estructural y el oscuro papel de la Fiscalía que no toma en serio las denuncias de las mujeres lideresas de los asentamientos humanos de Yopal y Nunchía, pero se muestra diligente para judicializar a la dirigencia social de Arauca y Casanare, lo que contrasta con su lentitud para establecer las autorías intelectuales, los responsables políticos y los financiadores del plan de exterminio contra la dirigencia social. Fue necesario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumiera el caso del exterminio de la Unión Patriótica y condenara –el 30 de enero de este año– al Estado colombiano como responsable del asesinato de más de seis mil personas del partido político Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de veinte años.

5. Las informaciones recibidas dan cuenta de la re - paramilitarización del Casanare, admitida por la comandancia de la policía departamental y la negativa de los mandos del Batallón Mecanizado Revéz Pizarro a reconocer la existencia del paramilitarismo en Arauca.

6. La gravedad de los ataques contra pueblos indígenas como los awá y los eperara-siapidara, sometidos al reclutamiento de menores y al confinamiento, cuyo territorio –en un 60%– está contaminado con minas antipersona, sin que operen acciones de desminado humanitario.

7. La necesidad transmitida por las organizaciones sociales de que en regiones como Casanare y Arauca se convoquen las mesas de derechos humanos, paz, y garantías, y se retomen los Puestos de Mando Unificado por la Vida, escenario creado para proteger a la población civil, dado que las multinacionales del petróleo ya cuentan con un batallón dedicado a protegerlas.

8. La persistencia del desplazamiento forzado de las comunidades negras de los territorios colectivos de Tumaco, Alto Mira y Frontera.

9. Graves ataques contra maestros-as rurales en Cauca, Nariño y Putumayo.

10. Recibimos denuncias contra la empresa minera canadiense Libero Cobre que en el Alto Mocoa tiene el rechazo de las comunidades que cuestionan sus métodos y el impacto de su actividad.

11. Recibimos denuncias de reclutamiento de menores y actos de “limpieza social” que afectan al colectivo LGTBI+, así como la explotación sexual y la violencia contra las mujeres en las zonas petroleras del Putumayo.

12. A pesar de las dificultades la Delegación Asturiana accedió a la cárcel Central La Picota en Bogotá y logró establecer las pésimas condiciones de reclusión de miles de prisioneros hacinados, sin atención médica, mal alimentados y obligados a hacer huelgas en las prisiones de La Dorada, Palo Gordo y Jamundí.

13. Constatamos el abandono del Estado a las víctimas de la guerra y la falta de voluntad de algunos funcionarios para atenderlas y repararlas.

14. Resaltamos el trabajo que está realizando la Agencia de Restitución de Tierras que avanza en la eliminación de obstáculos para agilizar la tarea de devolver a las víctimas las tierras que les despojaron.

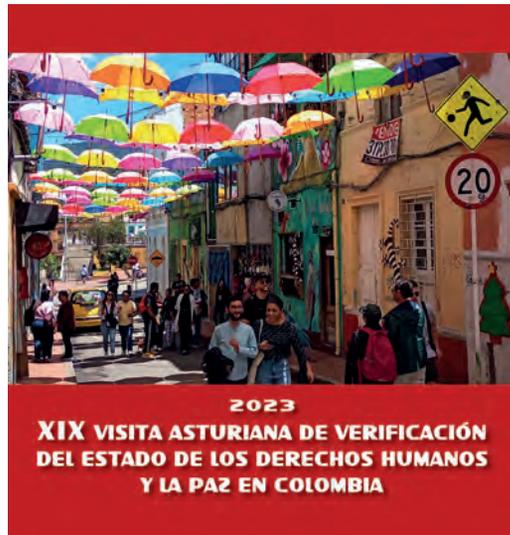
Regresamos a Asturias preocupados por la continuidad del conflicto armado interno y nos pronunciamos a favor del cese multilateral del fuego y de las hostilidades, para crear un clima propicio para el avance de los diálogos.

Expresamos admiración por la resistencia del pueblo colombiano a la guerra y al despojo, la firmeza con la que asumen el anhelo mayoritario de pactar la paz.

Nuestro esfuerzo de acoger en Asturias a personas de la dirigencia social en riesgo de ser asesinadas continúa este año.

Los esfuerzos que hacemos desde la diplomacia de los pueblos se suman al clamor mayoritario que exige paz, equidad y justicia social para Colombia.

Bogotá, febrero del 2023



LA DÉCIMO-NOVENA DELEGACIÓN ASTURIANA ESTUVO INTEGRADA POR:

RAFAEL PALACIOS GARCÍA, Diputado y portavoz del Grupo Político Podemos en la Junta General del Principado de Asturias.

JAVIER ARJONA MUÑOZ, Soldepaz Pachakuti.

MATEO GONZÁLEZ CID, de Ingeniería Sin fronteras, ISFA

PLAZA MARTÍN HELENA, Espacio joven de Comisiones Obreras de Asturias.

RUBÉN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Movimiento Asturiano por la Paz, MASPAZ.

MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Movimiento asturiano por la Paz, MASPAZ.

CRISTINA FERNÁNDEZ ALONSO, Asamblea Moza D'Asturies, AMA.

MINERVINO JOSÉ DE LA RASILLA SUÁREZ, Coordinadora Asturiana de Ons. Entre Culturas.

LUIS ESCRIBANO, de la Asociación Burgos con Colombia.

JAVIER OROZCO PEÑARANDA, Director del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.



Un cuarto de siglo después: una buena Declaración sobre defensores y una dura realidad

“Por el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”

ONU. Declaración de los Derechos Humanos

La Asamblea General de la ONU adoptó en 1998 la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”,

conocida como “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”.

La Declaración reconoce que hay un movimiento mundial por los derechos humanos y señala que toda persona tiene la función de defenderlos, no sólo los gobiernos que votaron la Declaración.

Define a los defensores de los derechos humanos como individuos o grupos que actúan para promover y proteger derechos y libertades fundamentales por medios pacíficos, y atribuye a los gobiernos el deber de promover todos los derechos humanos de la manera más amplia incluida la educación, difundir, apoyar y proteger a las personas y organizaciones que los defienden mediante actuaciones en los ámbitos nacional e internacional.

La Declaración asigna a los Estados el deber de proteger también a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables, y proteger a las personas frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración.

La Declaración señala que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella y alienta a todos a ser defensores de los derechos humanos, a fomentarlos, y a salvaguardar la democracia y sus instituciones y no violar los derechos huma-



nos ajenos y se refiere de manera especial a la responsabilidad que le cabe a quienes ejercen profesiones que puedan afectar a los derechos humanos como policías, abogados, jueces, etc.

LA REALIDAD

Un cuarto de siglo después de la promulgación esta Declaración sobre defensores, resulta evidente su importancia, tanto como su falta de resultados, en un mundo en el que proliferan los ataques impunes contra las personas, sus derechos y quienes los defienden.



No es solo en Colombia sino en casi todo el mundo van parejas las luchas por superar causas estructurales que originan violaciones masivas de los derechos humanos y el incremento de los ataques para contrarrestar los avances que impulsan las organizaciones sociales y las personas defensoras.

En todo el mundo crecen los ataques contra los pueblos indígenas que defienden la biodiversidad en amplios territorios y contra los ecologistas que defienden el derecho a un medio ambiente sano, y contra los sindicalistas dentro de una estrategia global que inicia con una oleada ideológica empresarial a la que siguen campañas de desprestigio seguidas de penalización por huelgas y al final vienen los asesinatos, como sigue pasando en Colombia a pesar del reconocimiento de legitimidad otorgado por el gobierno de Petro.

Las principales fuentes de esta violencia masiva son los centros del poder económico que desatan guerras para vender armas e imponen sanciones masivas que pagan los pueblos sometidos a violencias indiscriminadas, bloqueos y despojos de territorios y de derechos laborales.

Más de cien millones de personas refugiadas dan una dimensión de la hecatombe

global que origina el neocolonialismo y la acción de las multinacionales incluidas las que trafican con armas, alimentos, energía, capitales, drogas y personas.

Seguimos con buenas declaraciones en la ONU adoptadas por gobiernos votados por los pueblos, pero sometidos al poder de corporaciones gigantes que nadie eligió, que se benefician de la violencia, que no se hacen responsables de nada y a las que se debe enfrentar de manera masiva y pacífica por el mandato de la Declaración y por el cansancio ante tantas guerras y ataques.

Habrà que definir las responsabilidades de las multinacionales y hacer que sean exigibles, tanto como poner límites a los derechos de propiedad.

Tenemos que ponerle bozal a las corporaciones o seguirán mordiendo la dignidad humana en lo que queda de planeta vivo, a pesar de los buenos textos expedidos por el sistema internacional de los derechos humanos.

Un cuarto de siglo después de la Declaración sobre personas defensoras quienes defendemos los derechos humanos seguimos sin garantías para preservar la vida y la libertad. Y eso afecta a toda la humanidad y a su futuro.





Un año de aire fresco en Colombia

Colombia cumplió —el 7 de agosto— el primer año del primer gobierno de rai-gambre popular en dos siglos.

Hacía falta aire fresco en un país sumido en la exclusión violenta, la impunidad y el odio.

Sabíamos que las élites económicas y las otras mafias iban a reaccionar mal si perdían las elecciones, pero algunas almas cándidas pensamos que en un arrebato de sensatez podrían ceder algunos de sus privilegios

para quitarle presión a la olla social que venía estallando en los últimos años.

No ocurrió tal cosa. Tan pronto ganó las elecciones la coalición de izquierda encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez los ricachones montaron berrinche y anunciaron el Armagedón en sus medios de intoxicación masiva.

Perder elecciones y algunos privilegios no les parece democrático.

No están dispuestos sin pataletas peligrosas a soltar la teta del Estado que parasitaron perorando sobre los frutos del esfuerzo empresarial, las bondades de la competencia y del libre mercado.

Con el nuevo gobierno se hicieron visibles las costuras de una burguesía muy corrupta, peligrosa y atrasada, que luce un traje hecho con sangre obrera y despojo campesino, con la impunidad para las rentas del narcotráfico, de la tierra ociosa y el saqueo de las arcas públicas convertidas en su botín.

Están convencidas las elites de que suyo es el presupuesto nacional, la contratación pública, la plata de las pensiones, la de la salud y la educación, las minas, las tierras –incluidas las robadas–, las calles y las carreteras con sus peajes, la comida, el aire, el agua, las basuras, la electricidad, el gas, las comunicaciones, la justicia, la fiscalía, la fuerza pública, la guerra y la paz, la bandera, el himno, la patria, la verdad, la vida y la gloria por los siglos de los siglos.

Pero se jodieron.

A pesar de la oposición feroz que empezó en la campaña batiendo la bandera del miedo al desastre económico y el caos social si gobernaba la izquierda, un año después no les cayó esa breva.

Ni las hordas comunistas ni la muchedumbre de desposeídos por el robo de lo público y por la guerra se tomaron los bancos, ni sus empresas, ni sus mansiones, ni las haciendas, ni sus fábricas de mentiras.

Y no por falta de valor o de causa justa, sino porque se quiere la paz y las gentes cansadas de la guerra interminable aguantan más de lo que la necesidad exige.

Se han opuesto como gato panza arriba y por todos los medios sucios a que avancen las reformas más urgentes que le darían vidilla al personal más pobre. La reforma laboral, la pensional, la de salud, la reforma agraria...

Así que “los nadie”, la mayoría que soñamos en esa sociedad excluyente, votamos y logramos hace un año tener el gobierno, pero no tenemos el poder. ¿Eso ... pa' cuándo lo dejamos?



El país en manos de la izquierda sigue creciendo en lo económico, sube el empleo, se subió el salario mínimo, se controló la inflación y se está paliando el hambre de multitudes a falta de reformas estructurales dada la desfavorable correlación de fuerzas en el Congreso de la República, porque gente luchando hay, pero falta más presión social dice Petro que ha llamado a tomar masivamente las calles porque el progresismo-reformismo en el gobierno tiene un límite que solo lo rompe la lucha popular masiva y con vocación de poder.

Se ha puesto al centro la promoción de la economía campesina como generadora de alimentos y la dignificación de los pueblos indígenas y de las comunidades negras que protegen con su vida los territorios, la biodiversidad y la cultura ancestral.

Avanza la restitución de las tierras despojadas al campesinado y el reparto de algunas fincas que se compraron para que no se aterroricen los señores feudales con la expropiación o la extinción del derecho de dominio, que siendo legales sabemos que les sabe a régimen totalitario.

Se ha disminuido el tráfico de cocaína con la incautación de más de quinientas toneladas al romperse la cadena de custodia en carreteras y aeropuertos con los relevos en los altos mandos del ejército y de la policía sobornados.

Promovemos la paz exterior al parar en seco las intenciones de invadir a Venezuela usando tropas colombianas por mandato de los halcones de los Estados Unidos acatado por los gobiernos lacayos del Uribato.

Se restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. No habrá guerra entre hermanos. Y se zanjó el litigio por límites con Nicaragua.

Dimos un paso al frente en medio de la crisis climática en la toma de medidas de consenso para salvar la selva del Amazonas con los pueblos hermanos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana y Surinam, y en la cumbre de los países ama-

zónicos de estos días se acordarán acciones que la Madre Tierra agradecerá.

Este gobierno busca la paz con justicia social.

Le está cumpliendo a la juventud con el acceso gratuito a educación superior, y está avanzando en el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, y comenzó hace pocos días una tregua bilateral con el ELN que renueva las esperanzas de poder vivir en paz en tres años.

Los diálogos con la sociedad en torno a las reformas necesarias para la paz comenzaron hace una semana.

Se reconoció la legitimidad de defender los derechos humanos y laborales, pero no se ha podido parar la violencia contra la dirigencia social que sigue cayendo asesinada junto a los firmantes de la paz. Tarea difícil mientras haya grupos paramilitares, mafias y una derecha matona que quiere el caos y convertir en ingobernable el país.

El combate a la impunidad estructural es otra tarea pendiente. El fiscal de bolsillo que tienen los mafiosos, matones y corruptos, saldrá en seis meses. A eso le temen los que se creen dueños del Estado.

Mucho hay que valorar en este primer año y muchísimo está por hacer.

Mientras juzgan al hijo del presidente y le aplican la pena que la ley prescriba, nuestro pueblo no se desanima y ante la amenaza de un golpe de Estado, duro o blando, y ante el reto de construir un futuro en paz y con dignidad, se sigue organizando para las batallas que vienen que van más allá de ganar las elecciones de octubre.

Estamos con Petro y con Francia en el gobierno. Habrá que ir por el poder, con la lucha de las multitudes que son un aire fresco para la esperanza, la paz y la vida.

JAVIER OROZCO PEÑARANDA

Director del Programa Asturiano de Derechos Humanos



Los pendientes con las lideresas colombianas hacia la paz

La Honorable Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-370 de 2006 explicó el alcance y contenido del derecho a la paz, dejando claro que es un derecho colectivo, una obligación ineludible para el Estado y un derecho individual con asidero en la dignidad humana. La propuesta de Paz Total promovida por el presidente de la república Gustavo Petro Urrego, busca garantizar que la población pueda ejercer, exigir y disfrutar de sus derechos y liberta-

des fundamentales afectadas por la violencia armada e indiscriminada que sumerge a las comunidades y particularmente a las mujeres en el temor y la desesperanza.

Son muchos los estudios que dan cuenta de las violencias directas e indirectas que han sufrido las mujeres en el marco de las hostilidades entre actores armados. No obstante, su participación en las mesas de negociaciones, como víctimas o como re-



presentantes de la sociedad política, ha sido minúscula. Baste como muestra los procesos de paz con el M-19, el Ejército Popular de Liberación -EPL-, el Movimiento Armado Quintín Lame -MAQL-, el Frente Francisco Garnica -FFG-, las Milicias de Medellín, el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, la Corriente de Renovación Socialista -CRS- o las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC, que no las incluyeron en las negociaciones, como tampoco se incluyó la perspectiva de género en los acuerdos finales.

El Acuerdo de Paz de la Habana, entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo- FARC EP, fue el primer proceso de paz que incluyó de manera amplia y ambiciosa la perspectiva de género. De manera puntual, establece obligaciones concretas para las partes en el Acuerdo Final. Su inclusión fue el resultado de la presión ejercida por las organizaciones de víctimas y por los movimientos feministas, nacionales e internacionales.

No era para menos. Durante décadas estas organizaciones han denunciado el uso de la violencia sobre el cuerpo físico y simbólico de las mujeres como una estrategia de guerra. La Corte Constitucional reconoció el impacto diferencial, desproporcionado del conflicto armado interno sobre las mujeres, de manera especial sobre las mujeres en situación de desplazamiento que deben ser sujetas de especial protección por los riesgos de su género, por las cargas extraordinarias que soportan con su rol de cuidadoras y por el vínculo entre discriminación estructural y

violencia armada. También señaló los riesgos que corren las mujeres que asumen liderazgos y participan en las organizaciones sociales.

Las organizaciones sociales lideradas por mujeres con enfoque de género, vienen liderando iniciativas de paz desde los años 90, interpelando las formas de relacionamiento en el conflicto y fuera de él a través del empoderamiento y el acompañamiento a mujeres y comunidades para detener la violencia basada en el género, transformar la sociedad y poner fin a todas las hostilidades, incluyendo la armada.

Ese es el trabajo de la Alianza Inicial de Mujeres por la Paz- IMP-, la Ruta Pacífica por la Paz, Mujeres al Derecho, Red de Mujeres Narrar para Vivir, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad -LIMPAL- Colombia, Humanas Colombia y otras organizaciones del orden local que aportan en temas humanitarios y de prevención y promoción de los derechos humanos, exigiendo el cumplimiento de las reglas del Derecho Internacional Humanitario, previniendo el reclutamiento y la utilización forzada de niños y niñas por los actores armados para las economías de guerra, en la búsqueda de familiares y amigos dados por desaparecidos o asesinados, en la denuncia de la violencia sexual, en la economía del cuidado de personas victimizadas o presentando iniciativas para la búsqueda de la paz desde el enfoque territorial.

Como se lee, las mujeres contra vendavales e infortunios han insistido en construir escenarios para la paz y en la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación. Su incansable labor logró la creación de la Sub-Comisión de Género en la Mesa de Negociación de la Habana que incluyó la perspectiva de género en los seis puntos de la Agenda de Negociación y el reconocimiento –en el Acuerdo firmado en Cartagena en septiembre del 2016– de las mujeres como sujetas de derechos y como actrices políticas importantes para la paz y para el desarrollo de la Nación.



Esto se compendió en medidas de acceso a bienes inmuebles y créditos a fin de empoderar económicamente a las mujeres rurales, estableció medidas de garantía y de promoción de acciones afirmativas con la finalidad de garantizar su participación política y social, promoviendo el fortalecimiento de sus organizaciones para una representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de las instancias a que se refiere el Acuerdo de Paz. Un aspecto muy importante fue el reconocimiento de las organizaciones de mujeres como sujetas de reparación.

También estableció que la fase de implementación de la Paz debía realizarse con plena garantía del derecho a la igualdad material, es decir, con la participación de las personas históricamente discriminadas y excluidas como es el caso de las mujeres, incluidas las mujeres excombatientes de las FARC-EP en el proceso de su reincorporación a la vida civil.

Como se observa, el Acuerdo recogió muchas de las demandas de las organizaciones de mujeres, a pesar de su escasa representación en la mesa principal de negociaciones.

Estos avances fueron opacados por las reformas que sufrió el Acuerdo Inicial tras la derrota del SI a la Paz en el Plebiscito, lo que implicó una renegociación acelerada que en algunos casos suprimió del documento los conceptos de enfoque, perspectiva y discriminación de género. En la práctica el Acuerdo del Teatro Colón –que se está implementando– relativizó los derechos de las mujeres contenidos en el acuerdo inicial de paz.

LAS DEUDAS PENDIENTES CON LAS MUJERES

Tras la firma del Acuerdo Final, en la fase de implementación, las violencias contra las mujeres no cesan.

Continúan las amenazas, los homicidios y las intimidaciones contra las mujeres que lideran procesos de empoderamiento ciudadano o reclaman sus derechos. Los datos evidencian violencias contra las organizaciones de mujeres. Según el Informe de Somos Defensores, desde el primero de enero del 2016 se ha incrementado el número de lideresas y defensoras de los derechos humanos amenazadas y asesinadas en relación con los años anteriores. Para el periodo comprendido entre enero del 2022 y marzo del 2023 registraron 1.098 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en Colombia, 228 de estos hechos fueron asesinatos, lo que prueba la persistencia de la violencia selectiva de los modelos de gobernanza criminal que operan en diferentes zonas del país.

En el periodo 2019 a marzo 2023 fueron asesinadas 104 lideresas sociales según el Observatorio para la Defensa de la Vida. Estas agresiones impactan sobre las mujeres y sus procesos organizativos, dificultan la incidencia en los escenarios en los que se deciden asuntos relevantes para sus territorios.

Aunque existe un cuerpo normativo amplio, que impone obligaciones al Estado respecto a los derechos de las mujeres para eliminar la discriminación y todas las formas de violencia sustentadas en la idea

de la inferioridad e incapacidad de las féminas con relación a los hombres, se sigue ocultando problemáticas que afectan a las mujeres, sobre todo a las lideresas sociales y a las defensoras de los derechos humanos, facilitando el escalamiento de la violencia y de la impunidad.

Las mujeres rurales, que estoicamente han sufrido los rigores de las violencias y de la discriminación, tienen luchas y reivindicaciones no reconocidas. Sus protagonismos en las discusiones políticas y en los arreglos institucionales siguen relegados frente a las luchas de sus compañeros hombres. Esta invisibilización –que procede de factores estructurales– incrementa su vulnerabilidad frente a los actores armados del conflicto, desconoce sus capacidades y les impide el acceso a bienes y servicios del Estado, incluidos los de seguridad y protección.

Si bien, el Estado creó la Comisión Intersectorial de Garantías para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos y el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, y fortaleció el Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida, SAT, imponiendo obligaciones a los alcaldes y gobernadores en materia de prevención y protección, son medidas ineficaces porque no incluyen la violencia estructural que precede a las agresiones.

En suma, el patriarcado y los estereotipos de género permean las actuaciones del funcionariado local y regional, de manera que, aunque exista la obligación de tomar medidas con enfoque diferencial, no concurren las habilidades, ni las condiciones institucionales que permitan actuaciones preventivas o protectoras que satisfagan las necesidades específicas de las lideresas. Es decir, aunque exijan y se movilicen por sus derechos, las mujeres no cuentan con herramientas institucionales efectivas, que garanticen sus derechos y libertades fundamentales, quedando a merced de las circunstancias o de los actores de poder que dominen el territorio.



Garantizar la eliminación de la discriminación contra las mujeres y su participación en todos los escenarios de la vida pública y privada no puede ser letra muerta, ni valiosas aspiraciones de igualdad y de justicia social. Es imprescindible que se tengan en cuenta en la propuesta de construir la Paz Total que impulsa el actual gobierno.

La aspiración de Paz Total requiere cambios en las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, potenciar la participación política de las féminas, propender por transformar los espacios familiares, educativos y comunitarios.

Es necesario que la labor de las organizaciones de mujeres en la búsqueda de la paz sea reconocida por el Estado y por la sociedad.

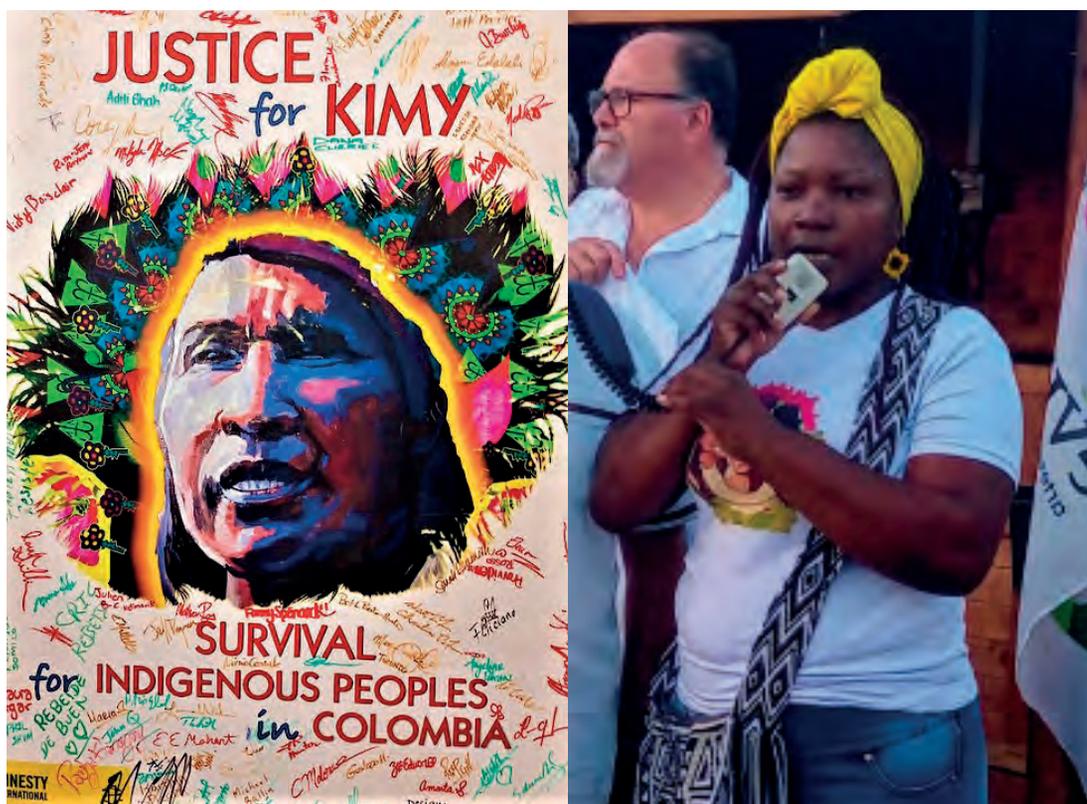
Que la búsqueda de alternativas para desactivar las violencias incluya la voz de las mujeres organizadas y de las lideresas de modo que las apuestas sociales que vienen desarrollando en los territorios puedan ser exitosas y sus vidas no corran riesgos.

Los caminos para la paz de Colombia están en construcción. Además de la voluntad política se requieren acciones concretas que materialicen las obligaciones estatales en materia de derechos humanos para las mujeres.

Se requiere que la discriminación y la violencia estructural sean derribadas. Se necesita que las mujeres impregnen los próximos acuerdos de paz que se firmen.

MARGARITA IRENE JAIMES VELÁSQUEZ

*Defensora de los Derechos Humanos.
Profesora en la Universidad de Sucre*



La autoridad étnica y la democracia local

La autoridad étnica es un órgano del gobierno propio de los pueblos indígenas y de las comunidades negras reconocido por la ley, con funciones administrativas y jurídicas dentro de los territorios ancestrales.

La integran personas designadas en asamblea general, también las que gozan de un prestigio especial por sus conocimientos y habilidades, por ejemplo, en la medicina ancestral a las que se les llama “sabedores – sabedoras”, y las que tienen una autoridad reconocida con el título y dignidad de “mayores – mayores”, con capacidad para mediar o dirimir conflictos e impartir justicia dentro del territorio.

Estas autoridades están pendientes de la armonía de las comunidades y de las familias, cuidan el desarrollo y mejoramiento de

la vida y juegan un papel importante en la transmisión de la cosmovisión y de las costumbres ancestrales.

La autoridad étnica está reconocida en el convenio 169 de la OIT y en la ley 70 de 1993 en su capítulo IV. También en el Acuerdo de Paz suscrito con las FARC dentro del Capítulo Étnico, en el que se reitera el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como la autoridad representativa de las comunidades negras, con sus formas propias de organización que incluyen los palenques de justicia, de ética y de valores humanos, entre otros.

Los Consejos Comunitarios expresan el sentir de la población, ejercen el control del territorio y aplican la justicia restaurativa necesaria para la convivencia pacífica. Su



importancia está reconocida en desarrollos legislativos que incorporan el concepto de territorio ancestral y la titulación colectiva de tierras necesarias para la pervivencia y el desarrollo de procesos de economías propias.

Sin embargo, las autoridades étnicas son perturbadas por la injerencia de personas foráneas, algunas veces armadas, con intereses en el territorio, que rompen con su violencia la armonía y el tejido social y organizativo de las comunidades. También los gobiernos, hasta el año pasado, menospreciaron nuestras formas de vida y de organización y violaron la autonomía comunitaria partiendo de la falacia de que no somos capaces de ejecutar el desarrollo,

subvalorando los mecanismos internos de autoridad y de consulta, desconociendo los mecanismos de protección propia como la Guardia Cimarrona encargada de cuidar la vida y el territorio. Esta problemática se da especialmente con los grupos armados, legales e ilegales, que pretenden controlarnos mediante la violencia.

La autoridad étnica y nuestras formas de trabajo y de organización comunitarias deben ser respetadas, salvaguardadas. De eso depende la integridad de nuestras culturas y de los territorios, el relevo generacional y la transmisión de los conocimientos ancestrales y de la cultura que los expresa.

LADY L. RIASCOS SEVILLANO

*Autoridad Étnica del Consejo Comunitario
La Nupa del río Caunapí. Tumaco/Colombia*

AURA J. CARABALÍ MOZORONGO

*Corporación Colectivo de Mujeres
Trascendiendo Por La Paz.
MOVICE Capítulo Cauca*





DAMOS LA BIENVENIDA A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

¡POR UNA UNIVERSIDAD ANTIPATRIARCAL!

Construyamos poder feminista y popular en las universidades.

La niñez y la juventud en peligro

Pese a los esfuerzos del actual gobierno por alcanzar la paz total, en zonas del departamento de Santander y en la región del Magdalena Medio se han incrementado las acciones militares contra la población civil y el reclutamiento que pone en alto riesgo a la niñez y a la juventud.

El Clan del Golfo - Autodefensas Gaitanistas, las disidencias de las antiguas FARC- EP, -incluso el ELN-, continúan reclutando forzosamente a niños, niñas y adolescentes para utilizarlos en acciones militares, en actividades de apoyo y en las redes del narcotráfico. Se aprovechan de la marginalidad de la población, de la pobreza, de la falta de oportunidades de estudio y de trabajo decente, para someterlos a actividades ilícitas que casi siempre tienen un final lamentable.

Hay instituciones educativas que han sido penetradas por el flagelo del tráfico y del consumo de estupefacientes. Una docena de profesores del corregimiento de Puerto Olaya, municipio de Cimitarra, ha sido amenazada de muerte por criminales del Clan del Golfo por denunciar el reclutamiento y la instrumentalización de estudiantes para la venta y el tráfico de sustancias ilícitas.

En la Institución Educativa Promoción Social del municipio de Piedecuesta del área metropolitana de Bucaramanga, los estudiantes son abordados por integrantes de las bandas mafiosas para obligarlos a delinquir bajo la amenaza de asesinar a sus padres o a sus hermanos si se rehúsan a trabajar para ellos. Las autoridades han recibido muchas denuncias, pero el acoso continúa, en muchos casos por la omisión del deber de



miembros de la fuerza pública y de los entes de control, sobornados por los narcotraficantes para sus planes de expansión.

Una de las consecuencias de este problema es el incremento en esas regiones del asesinato de niños-as entre los 14 y los 17 años, y jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años.

Las organizaciones de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo informaron que en el último año y medio en la ciudad de Barrancabermeja se registraron 198 homicidios de personas en esos rangos de edad, y en la ciudad capital de Santander –Bucaramanga– y su área metropolitana que incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta, hubo 173

homicidios el año pasado y hay registrados 74 más en el primer semestre del 2023.

Las organizaciones sociales siguen en una lucha incansable contra la presencia de la mafia y de grupos armados en las calles y en las instituciones educativas.

Los movimientos populares, sindicales, campesinos y estudiantiles intentan detener el problema y han enviado un fuerte mensaje por el respeto a la vida y los derechos de la niñez y de la juventud. Al gobierno le han propuesto acciones para la equidad y la inclusión real de los pensamientos y de las prioridades de los jóvenes para tener un país con oportunidades para superar un contexto peligroso y desolador.

La paz total no es una urgencia solo para la población de las zonas rurales. En las ciudades hay que intervenir de inmediato para avanzar en la superación de esta realidad que niega el derecho a la paz y a la vida para quienes son el futuro del país.

DAVID MAYORGA OSORIO

*Líder Social, defensor de los Derechos Humanos.
Director Corpoindh*





De narcos, banqueros y otros bandidos

El tráfico de drogas es un negocio y un problema global, como la fabricación y el tráfico de armas.

Los carteles del narcotráfico son multinacionales del crimen con el poder económico y militar suficiente para capturar instituciones mediante la violencia o el soborno. “Plata o plomo”.

Eran los métodos de la bananera UFCO en Centro América hace un siglo.

Es el mismo –con más propaganda– que USA hoy el complejo industrial y militar de

Estados Unidos con su OTAN para justificar guerras en nombre de la libertad.

Hay delincuentes que trafican drogas, señores que fabrican armas y banqueros que les lavan el dinero. Bandidos todos.

El narcotráfico es un emprendimiento que le da oxígeno al capital globalizado. Junto con la guerra y la especulación financiera son sus negocios más rentables. Uno de ellos es ilegal. Tal vez por eso.

Las drogas se producen en el sur para su consumo en el norte. Las armas, al revés. La



colosal masa de dinero que generan irriga el sistema financiero que la recibe frotándose las manos con alcohol y sin taparse las narices. “Plata es plata”.

Denuncias por lavado de dinero hay. Lo que no hay son sanciones y no es por falta de pruebas... los activos mal habidos siempre dejan rastros.

Un Informe del Bloomberg Markets Magazine señala que bancos de Estados Unidos y de Europa blanquean miles de millones de dólares del narcotráfico. Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express, Western Union y el español BSCH, señalado en un reporte del Observatorio de las Multinacionales en América Latina.

En Colombia el grupo AVAL –propietario de una parte de la gran prensa, bancos

e industria– se consolidó como el más efectivo centro de corrupción para apropiarse de la contratación pública y como un enorme lavadero de dineros del narcotráfico. Su propietario LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO está tan convencido de que el país le pertenece que le advirtió de manera pública al gobierno del presidente Petro “Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo”.

Ninguno de estos bancos ha sido acusado de malas prácticas por las entidades internacionales de control bancario. Los bandidos que se roban lo público, trafican armas y trapichean con drogas, gozan de impunidad global con sus banqueros.

NARCO-ESTADOS

El narcotráfico no está en el origen del conflicto armado colombiano, pero es leña que lo atiza y junto con la inequidad lo convierte en persistente, sobre todo desde que el Estado abandonó los programas de apoyo al campesinado en la década de los 90s y acabó con el proceso de reforma agraria iniciado en 1961.

Como fuente de acumulación de riqueza el narcotráfico impacta en la sociedad y en las instituciones. Destruye el Estado de Derecho con su poder corruptor y su violencia impune. Por ese camino las mafias se van llevando a países como Ecuador, México o Perú. Y la lista es larga.



En Colombia –en los últimos cuarenta años– la mafia penetró la política, la fuerza pública, el aparato de justicia y la sociedad.

Se perfiló un narco-Estado que compartió propósitos criminales durante los gobiernos de Uribe y Duque con los grupos narco paramilitares para exterminar a la izquierda opositora y para despojar de sus tierras al campesinado aparentando que combatían al narcotráfico.

Quedó claro que Uribe no combatió a la mafia de la que proviene, y que la guerra de los Estados Unidos y su DEA contra el narcotráfico no es real.

En Colombia con el dogma del libre mercado y con la tapadera de la guerra al narcotráfico se criminalizó al campesinado y desataron tal violencia que le despojaron una extensión de tierras equivalente a nueve Asturias.

Los cárteles sembraron más coca, marihuana y amapola, otra bonanza de dólares llenó las arcas de terratenientes y banqueros hermanados con los traquetos –nuevos ricos mafiosos– en la causa contrainsurgente y en el afán de lavar las riquezas mal habidas.

El nuevo gobierno combate a las mafias y da resultados capturando bandidos y cargamentos, pero el problema es mundial.

MAFIAS GLOBALES

Las mafias del narcotráfico comparten métodos con las multinacionales del armamento y son fuentes de muchas violencias, de inestabilidad, de degradación humana y ambiental en todo el mundo.

Como problemas globales se requiere una política que controle los flujos de capital, que combata la impunidad y que aborde desde otras perspectivas el consumo de drogas.

Es necesario que se exija en las calles –ya que los gobiernos no quieren o no pueden– las responsabilidades por el desastre global que causan las multinacionales de todos los pelambres.

De lo contrario habrá combustible para más guerras que agraven la decadencia humana y ambiental.



El gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez está cambiando la política antidrogas interceptando el tráfico, ha dejado de perseguir a los campesinos productores y está acordando con ellos opciones productivas diferentes. Pero hay dos obstáculos: la falta de seguridad en los territorios y las prohibiciones contenidas en los tratados de comercio suscritos con los gringos que prohíben la siembra por el campesinado colombiano de cultivos legales con producción excedentaria en USA.

Se tratará de renegociar esos acuerdos leoninos. Mientras tanto se avanza en la protección de las selvas devastadas para sembrar coca y el propósito de construir una sociedad saludable, equitativa y en paz.

Son propósitos que merecen el apoyo de los pueblos de Europa y el de sus gobiernos, por la cuenta que trae para la humanidad el permitir que las multinacionales de las drogas, de las armas y la banca armada que financia guerras y blanquea capitales, sigan agrediendo la decencia y la vida de manera impune.

JAVIER OROZCO PEÑARANDA
Colectivo de Refugiados en Asturias
Luciano Romero Molina



**El sindicalismo con
la soga al cuello**

**DE GOTA
EN GOTA
COLOMBIA
SE AGOTA**

GOTEO DE MASACRES

El sindicalismo está siendo perseguido cada vez más en todo el mundo. En Colombia ha sido estigmatizado y perseguido a muerte desde sus orígenes. Hay un exterminio sistemático, una violencia antisindical con miles de asesinados, un genocidio de vieja data.

Una parte de los semilleros latinoamericanos de movimiento solidario, sindical y cooperativo, se remontan a las Sociedades de Artesanos de Bogotá que lucharon desde 1848 contra la importación de manufacturas –sobre todo de Inglaterra– que llevaban a la quiebra a los artesanos locales.

Este movimiento gremial, conformado por comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos negros, se transformó en un vigoroso movimiento político llamado Sociedades Democráticas que hicieron la Revolución del Medio Siglo en la que se expulsó a los jesuitas, se estableció la libertad de prensa, se abolió la esclavitud y se sacaron al mercado tierras y minas que estaban en manos de la iglesia y de particulares que fueron expropiados para fortalecer las finanzas del Estado.

La oleada conservadora que se impuso después revirtió esos cambios, indemnizó a la iglesia y persiguió a muerte a los reformistas que fueron apresados, desterrados, ejecutados. Es la primera ola de persecución a un sector popular organizado en defensa de la producción y del trabajo nacional.

A comienzos del siglo XX la compañía bananera UFCO de los Estados Unidos logró que el ejército colombiano reprimiera la huelga de 25 mil obreros que exigían mejores condiciones de trabajo. Dispararon sobre la multitud en la madrugada del 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga/Magdalena. Esta masacre fue el bautizo de sangre a la clase obrera. Lo narra García Márquez en Cien años de soledad.

En los últimos cien años el movimiento sindical ha sido señalado y perseguido a muerte varias veces.

La última oleada de terror la ejecutan empresarios criollos y multinacionales



usando sicarios del narco-paramilitarismo con aliados dentro de la fuerza pública. Han asesinado más de 3.400 entre afiliados y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de Colombia desde su fundación en 1986. Son crímenes impunes pues en menos del 6% de los casos la justicia capturó a los sicarios. Nunca la fiscalía ha identificado y sancionado a los autores intelectuales, a los beneficiarios del genocidio.

Entre las empresas con más sindicalistas asesinados están Coca Cola, Nestlé, Ecopetrol, Unión Fenosa, Drummond, pero hay centenares de sindicalistas asesinados en la agroindustria, en la minería y entre los opositores de las privatizaciones de la salud, de la educación y de las empresas estratégicas y rentables del Estado, en sectores como el eléctrico, las telecomunicaciones, la banca, y en sindicatos de servicios básicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado y aseo.

Cada sindicalista asesinado suma dividendos en las cuentas de la patronal que ha ido imponiendo –mediante corrupción al Congreso y a sangre y fuego contra los obreros– el trabajo sin derechos, las violaciones de los derechos laborales individuales y los derechos colectivos de asociación, movilización y huelga.

El resultado es un país con altas tasas de desempleo y un sindicalismo que pierde afiliados. Contratos basura para un país joven, obligado al rebusque, a la emigración o a la delincuencia. Y el incremento de la conflictividad social por la falta de equidad, de oportunidades, de respeto para la juventud y para la clase obrera.



El anti-sindicalismo es una vieja práctica de sectores de la patronal y de la fuerza pública con la ayuda de la prensa que señala a los sindicalistas como zánganos, aliados de la guerrilla, antipatriotas que espantan la inversión y destruyen las empresas. Han logrado generar en sectores de la sociedad y de la clase obrera un sentimiento de solidaridad con la patronal y un odio a los sindicatos. A esto se le suma la proliferación de sindicatos de base impulsados por la patronal cuando les conviene dividir a los trabajadores.

Menos mal que el nuevo gobierno ha dejado claro que es legítimo organizarse en un sindicato, hacer huelga y movilizarse, como lo establece la Constitución Política en su artículo 39.

Sin embargo, continúan los metidos anti sindicales. Un obrero de FANALCA, empresa de recolección de basuras afirma: “La realidad desde mi experiencia sindical es que enfrentarte con la maquinaria de esta multinacional es una lucha desgastante. Para ellos no es lógico que el trabajador mejore sus ingresos. Se aprovechan hasta de la última gota de tu fuerza de trabajo, aunque te enfermes. Somos tratados como marionetas. Al firmar un contrato es como si les vendieras el alma y la vida sin protestar, o te tratan de terrorista. Pagan un salario de miseria y toca trabajar muchas horas extras para que la familia no sienta el frío del hambre, la ausencia de un plato de comida en tu mesa.”

FANALCA persigue a los sindicalistas colombianos y les roba el trabajo usando diferentes nombres. Este grupo empresarial también chupa sangre obrera en la India, Panamá, Ecuador y Chile.

En Colombia es peligroso ser sindicalista. No es fácil organizar un sindicato y enfrentar los abusos de multinacionales como FANALCA con todo en contra, con la sogá al cuello.

CRISTIAN NARVÁEZ SERRANO
Dirigente de SINTRAESMDES-CUT





Una sociedad pobre en un territorio rico

“Somos tan ricos como territorio y tan pobres como sociedad” “¿Por qué tengo que huir, si no le debo nada a nadie? Quiero trabajar en mi ciudad, cumplir mis sueños y aportarle alegría a mi comunidad con el baile y la cultura”

Luilly A. M., joven de Buenaventura

En Colombia se considera jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 14 y los 28 años, edad en la que se supone que tuviste acceso a la educación primaria y secundaria, que sacaste una carrera universitaria y que, dada la empleabilidad a esas edades, tendrás un trabajo.



La realidad no es esa para la juventud citadina y menos aún para la juventud rural que vive en los territorios abandonados por el modelo de desarrollo anti campesino predominante.

La prioridad del Estado es vincular a los jóvenes a la guerra, mediante el servicio militar obligatorio. La de los grupos armados ilegales es forzar su vinculación a las estructuras armadas que pretenden el control social y económico mediante el terror que confina a las comunidades, amenaza a la dirigencia, extorsiona, desaparece y asesina a quienes se oponen a sus planes.

Por eso conquistar la paz es la prioridad para quienes pagamos el precio de la guerra y de las violencias desatadas.

Por eso el apoyo de las juventudes al Acuerdo de Paz firmado –el 26 de septiembre de 2016– entre el Estado colombiano y



la guerrilla de las FARC–EP. Ese tratado contiene medidas para garantizar la vida de las comunidades y de los sectores sociales más golpeadas por la violencia histórica que aún padecemos.

La movilización para lograr la paz es el escenario de lucha para millones de personas excluidas y violentadas. Queremos hacer valer en las calles los acuerdos de paz, los instrumentos legales y las reformas estructurales propuestas por el nuevo gobierno para superar el atraso, las violencias y las desigualdades.

Los derechos más importantes para la población se ven afectados por la creciente polarización social impulsada por la prensa de los monopolios y por las acciones violentas de bandas armadas que convirtieron en intocables los privilegios de las élites que controlan el país.





Es tanto el conflicto que los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales no dan tregua, ni las injusticias en el proceso penal contra jóvenes que se identifican con la defensa de alguna causa justa, ni el accionar desmedido de los grupos armados contra la población civil, ni la parálisis cómplice de las fuerzas armadas, ni las mentiras cotidianas en los medios de desinformación masiva. Y en medio, un gobierno nuevo que intenta pactar treguas con los grupos armados al margen de la ley y llegar a acuerdos en el Congreso de la República, para desarrollar el país y mejorar la vida de las poblaciones.

Un joven afro descendiente del Valle del Cauca fue desplazado del puerto de Buenaventura junto con su familia, pero decidió retornar tras el anuncio de paz entre la banda de los “Shottas” y la de los “Espananos” que llevaban más de dos años ejerciendo el control territorial y volviendo una pesadilla la vida de los habitantes del primer puerto marítimo de Colombia. Dejó su empleo en Cali para volver al barrio de su ciudad en diciembre pasado. Se reintegró a las actividades culturales comunitarias hasta que un sábado cuando se movilizaba en un taxi con dos compañeros de baile, Lully y Andrés Felipe, fueron retenidos, señalados y estigmatizados por agentes de la policía, lo que generó extorsiones y el desplazamiento de sus familias. Las madres quieren sacar a sus hijos del riesgo con el apoyo de la comunidad para evitar poner en peligro a una persona en concreto, en barrios donde impera, como en las cárceles, la ley del silencio.



El cerco contra la juventud no proviene solo de las amenazas de grupos armados. También de informes falsos de la policía y de la fiscalía que les persigue mediante montajes judiciales sin que las víctimas se puedan defender por falta de dinero. A veces la defensa la asumen abogados de oficio o personal de la Defensoría de Pueblo con menos recursos técnicos que quien les acusa.

Las organizaciones juveniles tienen a la mayoría de sus miembros amenazados, desplazados. El objetivo de los violentos es limitar sus acciones reivindicativas dentro del territorio, mantener el control de la sociedad y facilitar reclutamientos forzados que la prensa suele ocultar.

Es una lucha contra las maquinarias que tienen el poder económico y las armas en un territorio muy rico, en el que la juventud reinventa formas de resistencia para evitar un empobrecimiento mayor de la vida social de las comunidades.

Por eso la movilización y la presencia en espacios como la Plataforma de Juventudes y los Consejos de Juventudes.

La juventud de Buenaventura lucha contra las desigualdades, contra las violencias urbanas y en los territorios ancestrales.

Se trata de sobrevivir, de resistir, de evitar la migración, el desplazamiento forzado, a pesar del peligro que representa para la juventud la presencia de todo grupo armado, sea legal o no, dentro de las comunidades.

MORGAN

*Joven de Buenaventura,
integrante de Visión Pacífico*

Tregua con el ELN hacia la “Paz Total”



El jueves 3 de agosto comenzó en todo el territorio colombiano una TREGUA BILATERAL de 180 días en la guerra que libran desde hace más de medio siglo el Estado de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Se espera que la tregua influya positivamente en la situación humanitaria que vive la población civil en regiones de las fronteras con Venezuela, Panamá y Ecuador, y en otras del interior del país como el Magdalena Medio.

La tregua será supervisada por una Misión de la ONU y permitirá que la sociedad participe en los diálogos de paz acordados en la última ronda de conversaciones en La Habana que tendrán continuidad en Caracas entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre.

En la capital venezolana se pretende avanzar en los temas convenidos en ciudad de México: participación de la sociedad en la paz, democracia por la paz, transformaciones

por la paz, víctimas, fin del conflicto armado y ejecución de los acuerdos, con la perspectiva de que la guerra con el ELN acabe definitivamente mediante el diálogo y la negociación política en mayo del 2025.

En el acto del 26 de julio pasado en Gijón nuestro Colectivo de Refugiados-as expresó al gobierno y al pueblo de Cuba su gratitud por albergar los diálogos de paz con las FARC y en los últimos años con el ELN, a un altísimo costo pues su esfuerzo solidario fue tomado como excusa en el gobierno de Donald Trump (el diablo repartiendo hostias) para incluir –el 12 de enero del 2021– de nuevo a Cuba como país “patrocinador del terrorismo” y justificar el bloqueo ilegal e inhumano contra la población de la isla.

Colombia avanza en la búsqueda de la paz y los países amigos de la paz en Nuestra América y en Europa la acompañan solidarios.



Entrevista: Miguel Sanmiguel y la alegría solidaria

“Miguelito”, como lo llamamos los colombianos refugiados en Asturias, fue profesor de historia y geografía durante treinta y tres años en institutos del país vasco, La Rioja y Asturias.

Acababa de tocar con la orquesta Ventolín en el pasacalle solidario de la Semana Negra de Gijón y nos atendió con una sonrisa y con su saxo en brazos.

Bajo su sombrero de feria se asomaba una bandera Palestina y en la boca el grito contra el sionismo israelí. Lleva la causa de los pueblos árabes en el corazón junto con la de otros pueblos agredidos.

Hace unos años se embarcó en la Flotilla de la Libertad en la expedición Rumbo a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí. Hace pocos días en un pueblo de So-

ria y como heredero de raíces perdidas en el tiempo, caminó descalzo sobre brasas de roble.

Solidario y valiente, Miguel participó con la Charanga Ventolín –declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad– en los actos de homenaje a los republicanos españoles que lucharon contra los fascistas hasta liberar París durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué es la Charanga Ventolín? Somos un grupo musical internacionalista, que desde sus inicios ha luchado por la libertad y por los derechos humanos en donde quiera que sean conculcados, sea Palestina, Sáhara o Colombia, ahí estaremos tocando. La solidaridad es la seña de identidad de la charanga. Se trata de luchar con la gente que lucha, de apoyar a la gente que sufre, de estar con ellos, con nuestra música, reivindicando la lucha y la alegría.

¿Cómo percibes a los pueblos de Colombia tan estigmatizados? El pueblo

colombiano está demostrando un nivel de organización y de resistencia impresionante. Ha sido capaz de revertir una situación de dominación violenta casi crónica, que se había enquistado en el país.

Es capaz de enfrentarse a poderes extraordinarios, a las mafias, al imperialismo yanqui y a subordinados como Uribe, y a las multinacionales con todo y su poder incluido el mediático, que a diario propala bulos, mentiras, para desanimarlo. Pero ahí está Colombia luchando.

La gente colombiana que llega refugiada a Asturias es solidaria como pocas, apoyando a otros pueblos que se debaten por causas justas. Han logrado que en Asturias haya mucha solidaridad con Colombia. Lo sentimos como un pueblo hermano que se la juega por sus derechos y que también acompaña otras luchas. Les enviamos desde Asturias con La Ventolín nuestro abrazo solidario y nuestro reconocimiento.





LUCIANO en la memoria de la lucha obrera

Hace dieciocho años, el 11 septiembre del 2005, fue desaparecido, torturado y asesinado en Valledupar/Colombia nuestro compañero sindicalista LUCIANO ROMERO MOLINA.

Compartimos con Luciano el refugio temporal en un piso de la calle Puerto Lei-

tariegos de Gijón, acogidos por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.

En ese grupo de cuatro refugiados amparados por la solidaridad asturiana estaba también la abogada Rosmerlyn, el sindicalista Esteban Barboza Palencia y el jo-

ven campesino y dirigente de la Juventud Comunista Colombiana Aristides Oime Ochoa, apresado en el 2009 junto con su familia por el gobierno de Uribe Vélez mediante un montaje judicial.

Luciano había denunciado durante su refugio en Asturias los vínculos entre los grupos narco-paramilitares y empresas multinacionales como Nestlé y Coca Cola, Financiadoras y beneficiarias directas del terrorismo antisindical, y había advertido –megáfono en mano en la plaza del Parchís de Xixón– que el gobierno de Uribe Vélez preparaba una enorme operación de falso desmonte y de legalización del paramilitarismo con la ley de Justicia y Paz.

El jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció desde hace 16 años que COLEGAN, CICOLAC - NESTLÉ y PROLECHE eran financiadoras de los grupos narco-paramilitares que asesinan sindicalistas y campesinos en varias regiones del país.

Sin embargo, ni la fiscalía colombiana, ni la justicia del cantón de Zug – Suiza, han querido investigar y sancionar penalmente a NESTLÉ, empresa que sigue gozando de la impunidad global junto con COCA COLA, a pesar de sus responsabilidades en CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD



como el genocidio contra los sindicalistas colombianos.

Luciano Romero Molina está presente en la memoria de los refugiados-as de Colombia en Asturias, en las acciones de quienes luchamos por los derechos humanos, por los derechos de la clase obrera, por libertades sindicales y contra la impunidad de las multinacionales.

¡LUCIANO, HERMANO, EN ASTURIAS NO TE OLVIDAMOS!





Anticolonialismo. “Le parfum” apesta

La lucha anticolonial vuelve al tablero. La eliminación del papel del Estado en la economía bajo el dogma neoliberal dejó a los pueblos en una inopia mayor y con la promesa falsa de que las leyes del mercado harían el desarrollo y la justicia social.

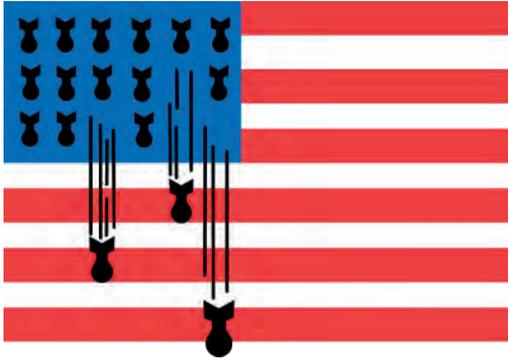
A punta de golpes de Estado –como en Chile– o de corrupción y guerras como en casi toda África y América, impusieron el modelo económico que les permitió seguir explotando mano de obra barata y robando materias primas. Los llaman acuerdos de libre comercio.

Nunca quisieron el progreso para nuestros pueblos recolonizados.

Aplicaron un expolio mayor con los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y nos llenaron de empresas multinacionales y de bases militares de Estados Unidos con pretextos como la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo –que ellos mismos auparon en muchos países–. Lo llaman acuerdos de cooperación militar. OTAN.

Los pueblos re-colonizados lo aprendimos y nos defendemos de nuevo.

Queremos autodeterminación, soberanía nacional y popular. Nos paramos en la raya exigiendo relaciones e intercambios sin desigualdades.



Indigna la hipocresía imperial de los poderes que mandan en Francia y en los Estados Unidos, autoproclamados defensores de la libertad y del progreso en toda África y en países como Níger, al que siguen imponiendo la miseria, ahora con la excusa antiyihadista, para perfumar el saqueo de las minas de uranio, oro, carbón, petróleo y otras materias primas.

A las gentes –sin un Estado que proteja de la miseria– solo nos queda el camino del rebusque, la informalidad laboral, o emigrar en masa siguiendo el vaho colonial de los saqueadores.

Es el mismo hedor a colonia rancia que esparcen los bloqueos criminales contra Cuba y Venezuela a nombre de la democracia. Un intento desesperado de los Estados Unidos por mantener bajo control el “patio trasero” dentro de la creciente pérdida de su hegemonía global.

Los pueblos sometidos a más de cien años de saqueos y de violencias no aceptamos que sigan imponiéndonos la guerra y la miseria en nombre de la libertad y de la democracia.

La guerra de los Estados Unidos y su OTAN –por ahora contra Rusia y después contra China– bajo el rótulo de “guerra de Ucrania”, atenta contra la paz mundial, implica la ruina para las gentes de esta Europa del capital que actúa como potencia subordinada al interés



imperial destruyendo su industria y su agricultura, desabasteciéndose de alimentos y de energía, endeudándose para comprar armas, empeñando el futuro de su juventud.

En África y en Nuestra América no nos resignamos a seguir siendo fichas en la geoestrategia de las grandes corporaciones que saquean y destruyen territorios y hambread a nuestros pueblos.

El perfumado colonialismo francés apesta en medio de la miseria impuesta a los pueblos de África.

La agresividad y las imposiciones gringas ofenden la inteligencia, el enorme valor y la dignidad de los pueblos de Nuestra América.

Somos anticolonialistas porque somos parte del Sur Global, pueblos en lucha por la soberanía, la paz, la justicia social y la libertad y tenemos claro que esas aspiraciones son imposibles bajo la férula de cualquier imperio.





Soldepaz, un cuarto de siglo internacionalista

El colectivo asturiano Asociación de Desarrollo, Cooperación Internacional, Solidaridad y Paz, Soldepaz Pachakuti, cumple 25 años.

Un cuarto de siglo acompañando a los pueblos y movimientos indígenas en aras de la transformación social, ética, política y cultural frente a las injusticias. Expresamos público reconocimiento a su incansable labor en la defensa de los derechos humanos y en el impulso de la paz con

justicia social en Colombia y en otras regiones del mundo.

Nuestra gratitud a Soldepaz y a su Junta Directiva por su acompañamiento solidario en la militancia por la vida: Marta Pérez Iglesias, Teresa Moreno González, Ana García Calleja, Ana Andrés Ablanado, Javier Arjona Muñoz, Daniel Busto Gutiérrez, Alba Nogueiro García.

COLECTIVO DE COLOMBIANOS-AS
REFUGIADOS EN ASTURIAS
LUCIANO ROMERO MOLINA



Medio siglo del golpe en Chile

Hace medio siglo, el 11 de septiembre de 1973, un grupo de militares tutelados por la CIA y por la extrema derecha internacional asesinó al presidente Salvador Allende e impusieron un régimen de terror de diecisiete años en Chile.

El terrorismo de Estado promovido por los Estados Unidos impuso una “legalidad” que prohibió los sindicatos, los partidos políticos, la ideología comunista y limitó las libertades básicas.

El régimen de terror encabezado por Pinochet comenzó por asesinar al Presidente Allende y a miles de chilenos. Miles más fueron apresados o desaparecidos.

Luego de destruir el sindicalismo y de paralizar al movimiento popular impusieron el modelo económico neoliberal que concentró más la riqueza en pocas manos y privatizó la salud, la educación y las pensiones.

Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos y el Secretario de Estado Henry Kissinger, decidieron poner a la CIA a conspirar junto con los militares chilenos para desestabilizar y derrocar el gobierno de la Unidad Popular que gobernaba Chile.

Que no cunda el ejemplo de que en América puede haber gobiernos populares, socialistas, era el propósito imperial. La orden fue “derribarlo”. Luego lo mataron.



LA VERDADERA MUERTE DE UN PRESIDENTE

Por Gabriel García Márquez

Septiembre de 2003.

En el trigésimo aniversario del golpe militar en Chile

La contradicción más dramática de su vida fue ser al mismo tiempo, enemigo congénito de la violencia y revolucionario apasionado, y él creía haberla resuelto con la hipótesis de que las condiciones de Chile permitían una evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa.

La experiencia le enseñó demasiado tarde que no se puede cambiar un sistema desde el gobierno, sino desde el poder.

Esa comprobación tardía debió ser la fuerza que lo impulsó a resistir hasta la muerte en los escombros en llamas de una casa que ni siquiera era la suya, una mansión sombría que un arquitecto italiano construyó para fábrica de dinero y terminó convertida en el refugio de un Presidente sin poder.

Resistió durante seis horas con una metralleta que le había regalado Fidel Castro y que fue la primera arma de fuego que Salvador Allende disparó jamás.

El periodista Augusto Olivares que resistió a su lado hasta el final, fue herido

varias veces y murió desangrándose en la asistencia pública.

Hacia las cuatro de la tarde el general de división Javier Palacios, logró llegar hasta el segundo piso, con su ayudante el capitán Gallardo y un grupo de oficiales. Allí entre las falsas poltronas Luis XV y los floreros de Dragones Chinos y los cuadros de Rugendas del salón rojo, Salvador Allende los estaba esperando. Llevaba en la cabeza un casco de minero y estaba en mangas de camisa, sin corbata y con la ropa sucia de sangre.

Tenía la metralleta en la mano.

Allende conocía al general Palacios. Pocos días antes le había dicho a Augusto Olivares que aquel era un hombre peligroso, que mantenía contactos estrechos con la Embajada de los EE.UU. Tan pronto como lo vio aparecer en la escalera, Allende le gritó: Traidor y lo hirió en la mano.





Allende murió en un intercambio de disparos con esa patrulla. Luego todos los oficiales en un rito de casta, dispararon sobre el cuerpo. Por último un oficial le destrozó la cara con la culata del fusil.

La foto existe: la hizo el fotógrafo Juan Enrique Lira, del periódico *El Mercurio*, el único a quien se permitió retratar el cadáver. Estaba tan desfigurado, que a la Sra. Horcencia Allende, su esposa, le mostraron el cuerpo en el ataúd, pero no permitieron que le descubriera la cara.

Había cumplido 64 en el julio anterior y era un Leo perfecto: tenaz, decidido e imprevisible.

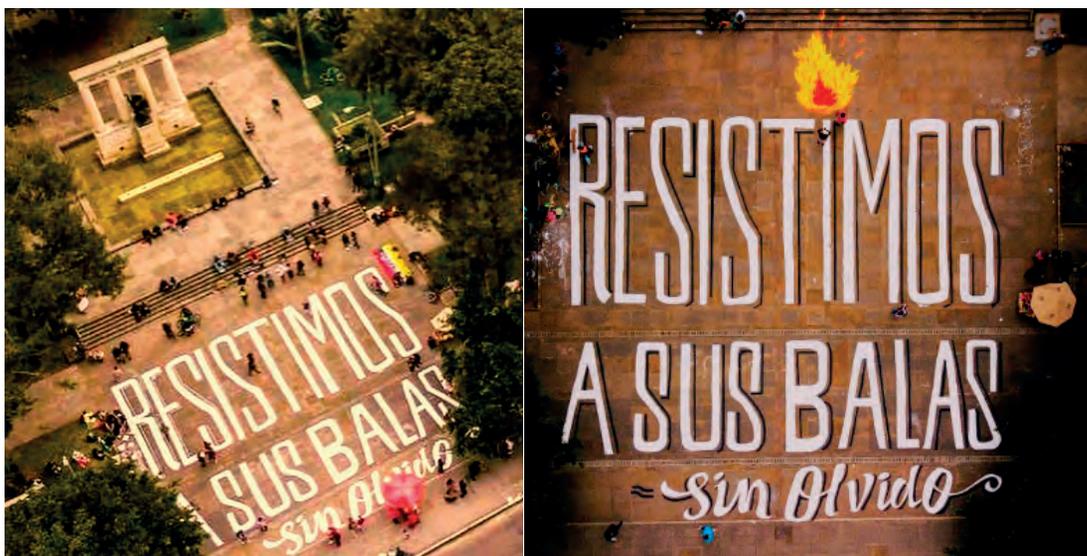
Lo que piensa Allende sólo lo sabe Allende, me había dicho uno de sus ministros. Amaba la vida, amaba las flores y los perros, y era de una galantería un poco a la antigua, con esquelas perfumadas y encuentros furtivos.



Su virtud mayor fue la consecuencia, pero el destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a bala el mamarracho anacrónico del derecho burgués, defendiendo una Corte Suprema de Justicia que lo había repudiado y había de legitimar a sus asesinos, defendiendo un Congreso miserable que lo había declarado legítimo pero que había de sucumbir complacido ante la voluntad de los usurpadores, defendiendo la voluntad de los partidos de la oposición que habían vendido su alma al fascismo, defendiendo toda la parafernalia apolillada de un sistema de mierda que él se había propuesto aniquilar sin disparar un tiro.

El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo, que se quedó en nuestras vidas para siempre.





El olvido que no somos

Los centros de poder se esfuerzan por distraer desde sus medios masivos la atención de la sociedad a punta de bombas “informativas”, auténticas cortinas de humo para esconder hechos graves dentro del conflicto armado interno, como el terror de Estado y la corrupción generalizada de las élites.

Los testimonios de algunos jefes paramilitares y los de decenas de militares ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en relación con las ejecuciones extrajudiciales, van dejando claras las responsabilidades del alto mando militar y del Presidente de la República de la época ALVARO URIBE VÉLEZ en miles de crímenes de lesa humanidad presentados como éxitos militares en el combate a las guerrillas.

La constante ha sido esconder que los métodos de terror de Estado fueron inculcados por los asesores militares de los Estados Unidos con su doctrina del enemigo interno, que las alianzas del ejército nacional con grupos de narco-paramilitares con adiestramiento israelí involucraron a la fuerza pública en una vorágine de criminalidad planificada y masiva, imposible de ocultar a pesar del olvido que quieren imponer.

En relación con ese olvido impuesto el artículo “Trampas al recuerdo, olvidos indu-

cidos y memorias sesgadas. Representaciones sociales de hechos históricos” de Alfonso Isuasty Rodríguez de la “Universidad de San Buenaventura explica:

“Las representaciones sociales en torno a los hechos históricos del conflicto armado, están marcada por un sesgo cognitivo y mnémico, acompañado de olvidos y silencios y por procesos de atribución de responsabilidad en los que se asume como principal responsable y enemigo absoluto a las guerrillas, especialmente a las FARC-EP. Esto invisibiliza la responsabilidad de los otros actores (Paramilitares, Fuerza Pública y Estado), generando un olvidos convenientes e inducidos que son funcionales a los intereses de ciertos sectores sociales que ostentan el poder político, económico y mediático, que promueven impunidad y contribuyen al mantenimiento de la violencia política para detentar su poder. Estos procesos de memoria hegemónica se constituyen en barrera psicosocial para la construcción de la paz, la democracia y la reconciliación en Colombia.

Por eso en las calles millones de víctimas del terrorismo del Estado colombiano seguimos gritando “Ni perdón ni olvido”.



Hacia la Paz Total con las FARC

El domingo 3 de septiembre en Suárez/ Cauca se firmó el Acuerdo Especial que abre el camino para la instalación de una Mesa de Diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla “Disidencias” o Estado mayor Central de las FARC-EP. En septiembre los delegados del gobierno de Petro y de esa insurgencia darán a conocer la fecha de instalación de una Mesa de Diálogos junto con el cese bilateral del fuego para generar confianza y reducir los niveles de la confrontación manteniendo el “derecho a la legítima defensa”.

Comienzan las misiones humanitarias en regiones muy afectadas por la violencia en el Sur de Bolívar, Norte de Santander, Antio-

quia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo. Las cinco últimas regiones -ubicadas en el sur-occidente colombiano- fueron visitadas en marzo por la XIX Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz.

En su Informe (ver <https://pachakuti.org/informe-colombia-19/>) se recogen datos, testimonios y propuestas de organizaciones, comunidades, víctimas e instituciones, todas coincidentes en la urgencia de abrir espacios de diálogo y de protección para la población civil.

Colombia sigue buscando la Paz. Asturias la acompaña solidaria.



Con el apoyo de  PROTECTDEFENDERS.EU

